

“El capitalismo extractivo-informacional en Sudamérica: sobre su gobernanza, sus resistencias y sus límites”

Alejandro Pelfini, FLACSO, Programa de Estudios Globales y USAL, Director de Posgrados, Fac. de Cs. Sociales

Victoria Mutti, FLACSO, Programa de Estudios Globales

Resumen:

El capitalismo extractivo-informacional representa un nuevo pliegue en el modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales en nuestra región. Tal como plantean Castells y Calderón (2015), al clásico extractivismo y al neoextractivismo se le agrega una dosis significativa de conocimiento experto, inversión y desarrollo (I+D) y conectividad digital, junto a la orientación exportadora y a la inserción en las cadenas globales de valor presentes en las formas anteriores. En este marco, en esta ponencia pretendemos profundizar en otro de los importantes contrastes involucrados relacionado con los mecanismos de legitimación y con las justificaciones de cada modelo. Así, vemos que, mientras que bajo el “ciclo progresista” el neoextractivismo fue justificado en muchos casos como un modo de obtener recursos para políticas sociales y redistributivas, así como también para financiar o subsidiar sectores económicos menos competitivos, en los contextos posteriores de crisis financiera y, en general, bajo gobiernos de derecha, el capitalismo extractivo-informacional, es considerado y justificado como la principal fuente para obtener divisas que permitan compensar los desequilibrios fiscales y la ausencia de recursos. Como todo modelo de desarrollo, éste contiene su forma específica de gobernanza, la que denominamos “gobernanza sustitutiva” (Pelfini, et al., 2020), por la cual el Estado abandona sus funciones primordiales de articulación del interés general y de bregar por el bienestar y los derechos de la ciudadanía y deja a las corporaciones el rol de agentes de “desarrollo” en los territorios en los que se instalan, como interlocutores directos de las comunidades locales. Como contrapartida, este modelo genera sus propias formas de resistencia que también resultan innovadoras, conectadas e informadas y disputan el conocimiento de los expertos y de las corporaciones. La descripción de este modelo en sus diversas dimensiones y la evaluación panorámica de su estado actual y de sus límites en un contexto de enormes tensiones en la región constituyen el objetivo principal de esta contribución.

1. Introducción y definiciones

Dentro de las categorías y conceptualizaciones utilizadas para designar un tipo reciente de gobernanza de recursos naturales y de estrategia exportadora en Sudamérica, quisiéramos destacar la de capitalismo extractivo-informacional (CEI), idea que coexiste, pero es menos visible y frecuente que la categoría neoextractivismo. Si bien en el CEI se mantienen ciertas continuidades estructurales a nivel de los modelos de desarrollo, también se van haciendo evidentes contrastes importantes entre lo que fue, por un lado, el ciclo progresista en Sudamérica y, por otro, los sucesivos gobiernos de derecha hasta llegar a los cambios de signo político ocurridos en la región más recientemente. En algunos casos se trata de contrastes tan marcados que permiten aventurar un nuevo tipo de capitalismo con características específicas. Los contrastes principales con el neoextractivismo tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones: en primer lugar, la dotación de nuevas tecnologías e innovación en los procesos de producción y distribución y, en segundo lugar, los mecanismos de justificación y legitimación. En este sentido, quisiéramos introducir el concepto de CEI, presentado conjuntamente por Manuel Castells y Fernando Calderón (2015).¹

El CEI representa un nuevo pliegue de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales. No implica entonces una ruptura, sino un paso más en un movimiento que viene del clásico extractivismo colonial y neocolonial (a fines del Siglo XIX) hasta el neoextractivismo a comienzos de este siglo. A la conectividad global y a la orientación exportadora se agrega el componente informacional y el conocimiento experto con alta dotación de I+D. La inversión extranjera directa (IED) ya no es necesariamente el agente principal en este modelo: en algunos sectores las capacidades locales y la participación de inversores y empresarios nacionales también es crucial, como en el caso de los agronegocios y las cadenas de biotecnología en Argentina y Brasil.

Un elemento clave a desarrollar a partir de este concepto, pero que apenas aparece esbozado por los autores en el original es la combinación novedosa de fragmentación y conectividad. Es decir, por un lado, observamos la existencia de nichos de innovación (que son menos que *clusters*) que apenas se encadenan productivamente con eslabones locales o de menor cuota de innovación y que tampoco se despliegan en el territorio; y, por otro lado, un alto grado de conectividad de esos nichos con sus mercados, con los lugares de origen de las inversiones y con los flujos financieros internacionales (en grandes proporciones, ilícitos).

1

Ver también Calderón (2015).

Aquí reside la paradoja del modelo extractivo-informacional: explotación intensiva de recursos naturales en forma de enclave productivo orientado a la exportación y alto grado de innovación y conocimiento que facilita su conectividad global, pero que a la vez se desvincula del territorio en el que se desarrolla. De esta manera, fragmentación y conectividad se relacionan con un tercer elemento decisivo en el capitalismo global que es la externalización, tanto de factores productivos y su derivación a con fines menos costosos (Lessenich, 2016), como de estilos de vida y patrones de consumo propios del “modo de vida imperial” (Brand y Wissen, 2017).

Esto se traduce en un tipo de relación con el territorio más volátil y líquida, más globalizada y en red que en el extractivismo tradicional. Aquí los flujos son más determinantes que la localización específica.² Desde ya que, al tratarse de recursos naturales, el territorio, suelo o mar junto a sus servicios ecosistémicos son claves. No obstante, esa localización puede ser cambiada con mayor facilidad (obviamente que esto depende de cada recurso, siendo relativamente más fácil y hasta frecuente en el cultivo de soja y menos en la minería). Estos cambios aprovechan los avances en georreferenciación satelital y tienen que ver con la permanente exploración de territorios con mayor rendimiento y menos costos que permiten optimizar ventajas a corto plazo.³

En la Argentina, podemos destacar tres casos de CEI: el cultivo de soja, según un modelo de agronegocios en la región pampeana y regiones adyacentes prolongándose al Chaco y Salta; la obtención del litio en los salares de la a Puna en Jujuy, Salta y Catamarca; y la extracción de petróleo y gas mediante *fracking* en los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén. Todos estos casos muestran tanto un despliegue de la relación (o dialéctica, si se

2

Estos vínculos más volátiles y líquidos con el territorio se encuentran estrechamente vinculados al creciente proceso de financiarización de las industrias extractivas, particularmente en el sector agroindustrial. En este cuadro se enmarcan, por ejemplo, los denominados “cultivos flexibles” (palma aceitera, caña de azúcar, maíz, árboles de rápido crecimiento y soja) que permiten la especulación y el cambio de manos y de producción en función de retornos temporales. Este tipo de cultivos flexibles y *commodities* no solo contemplan múltiples usos, sino también nuevos usos, previamente considerados inviables por falta de capacidad tecnológica o viabilidad comercial (por ejemplo, la soja como alimento para animales y el mercado de alimentos balanceados como una de las mayores fuentes de demanda del cultivo) (De los Reyes y Sandwell, 2018).

3

Existe una estrecha conexión entre los procesos de digitalización, georreferenciación, financiarización y acaparamiento de tierras (*landgrabbing*). En efecto, nos enfrentamos a un rediseño digital del uso del suelo enfocado a la propiedad privada individual según el cual se están inyectando millones de hectáreas en el mercado de suelo, en cadenas de valor globales y en la bolsa. En el caso de Brasil, por ejemplo, como señala un reciente informe de GRAIN (2020), actualmente se está llevando a cabo una financiarización inimaginable de la tierra, los recursos naturales y el sistema agroalimentario, principalmente a través de un sistema crediticio financiado por el mercado de capitales y ya no controlado por el Estado.

prefiere usar una palabra pasada de moda) entre fragmentación y conectividad, como una especial dotación e inversión intensiva en I+D, sea en el paquete tecnológico para la siembra directa, en la posibilidad de transformar el litio para fabricar baterías, o en la misma técnica del *fracking* y los insumos que requiere. Fragmentación, porque esas inversiones e I+D se concentran en enclaves con escasa capacidad de derrame o de encadenamiento productivo que permitan generar más valor y desarrollar otros bienes de capital. Conectividad, en la medida en que los inversores y pools de siembra pueden entrar y salir de los territorios con extrema facilidad y rapidez, valorizando su capital en los mercados financieros globales. Asimismo, estos ejemplos se constituyen en casos testigo y son frecuentemente mencionados (sobre todo el litio como futuro “oro blanco” y el petróleo y gas) como recursos ineludibles para generar divisas en forma urgente. De ahí que resulte relevante focalizarse en el actual contexto de austeridad contrastando con las visiones de futuro y los mecanismos de legitimación propios del anterior ciclo neodesarrollista en la Argentina.

2. Mecanismos de legitimación

Tal como planteamos al comienzo, el principal contraste entre el CEI y el neoextractivismo tiene que ver con los mecanismos de legitimación y el tipo de justificaciones esbozadas. Las justificaciones son un tema de estudio central en la sociología pragmática y en el análisis de las controversias morales en sociedades plurales y complejas (Boltanski y Thevenot, 2006). Los mecanismos de legitimación son una apuesta permanente y contingente en sociedades plurales donde la legitimidad no está garantizada por apelación a la verdad o a principios aparte del mismo orden político (Dogan, 2009). Así, la legitimidad debe construirse y reconstruirse sea en forma hermenéutica a través de la misma deliberación (Brunkhorst 2014), sea por los rendimientos concretos de una política pública (Lipset, 1959) o bien por la legalidad y racionalidad de sus procedimientos (Luhmann, 1969).

Durante el ciclo progresista, el neoextractivismo se justificaba como un modo conveniente para obtener excedentes que permitan financiar políticas sociales y medidas redistributivas, así como subsidiar servicios públicos o algunos sectores productivos poco competitivos. Desde ya que este modelo se aprovechó de un nuevo orden económico basado en un contexto regional favorable de alta demanda y precios de las *commodities*, categorizado desde una perspectiva crítica como “Consenso de los commodities” o “Consenso de Beijing” (Svampa, 2013, 2015; Svampa y Zlipak, 2015).

Muy diferente es el contexto que se va delineando luego de la crisis financiera de 2008, fundamentalmente a partir de la segunda década de este siglo, cuando los precios de las *commodities* descienden, los mercados emergentes comienzan a atraer menos capitales y las demandas sociales se vuelven más exigentes. Los gobiernos que comienzan a suceder a los anteriores progresismos o estos últimos que deben acomodarse de alguna forma a este nuevo contexto, ya no cuentan con los ingentes beneficios de la exportación primaria para sanear las cuentas. De este modo, el CEI se convierte en el principal vehículo para la obtención de divisas que permitan compensar los desbalances de pagos y desarrollar alguna estrategia de crecimiento. En este nuevo escenario, se desvanecen las expectativas para una estrategia de desarrollo basada en la dinamización de sectores productivos estratégicos y para construir nuevas cadenas de valor con impacto en el empleo y en la industrialización interna. Como máximo, solo se depositan expectativas en los efectos “derrame” de la innovación y en la intensidad de la I+D en los enclaves de punta conectados globalmente. Así, estos últimos se asumen meramente como nichos orientados a la exportación con el objetivo de generar las divisas que permitan equilibrar la balanza de pagos y reducir deuda y el déficit fiscal, aunque sin una expectativa de integración con otros sectores o de movilización de fuerzas productivas.

En este contexto se inscribe la praxis y la retórica del gobierno argentino de Mauricio Macri, reflejada en el siguiente extracto de un discurso en el que refuerza la importancia de la exportación de gas y petróleo:

“(…) Y todo esto es parte de montón de cosas, que hemos venido haciendo para recuperar algo tan central, como la energía, que arranca de la necesidad de haber vuelto a explorar y desarrollar nuestros activos, que todos veníamos escuchando – desde hace muchos años – “Vaca Muerta”, “Vaca Muerta”, pero seguía siendo algo potencial. Bueno, en estos dos años y medio, hemos pasado a transformar a “Vaca Muerta” de algo potencial a algo real, que nos permite proyectar más plantas como esta y nos permite pensar en que vamos a ser exportadores netos de energía, o sea en vez de tener que importar energía, vamos a empezar a exportar energía, empezando por Chile, que arrancaremos este enero y después al mundo entero y también barriles de petróleo, no sólo gas, y estamos hablando de miles y miles de millones de dólares (...)”.⁴

Esta orientación no se altera significativamente con la llegada al poder de una nueva correlación de fuerzas políticas a fines de 2019. En efecto, pese a una retórica

4

“Palabras del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en las instalaciones de la central térmica El Bracho, de YPF LUZ, en la ciudad de San Miguel de Tucumán”, Viernes 24 de agosto de 2018. <https://www.casarsada.gob.ar/informacion/discursos/43467-el-presidente-mauricio-macri-visito-la-central-termica-de-ypf-el-bracho-en-la-ciudad-de-san-miguel-de-tucuman>

preliminar neodesarrollista, el presidente electo, Alberto Fernández, inició su mandato argumentando que:

“(…) La Argentina que buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya, una Argentina en donde haya sentidos para producir y no para especular, una Argentina con una visión de proyecto nacional de desarrollo en el cual la agroindustria, la industria manufacturera, los servicios basados en el conocimiento, las pymes, las economías regionales y el conjunto de actividades productivas sean capaces de agregar valor a nuestras materias primas para exportarlas y potenciar un robusto mercado interno (…) Necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad, debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago. Quiero que todos comprendamos que el Gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default (…)”.⁵

La gran crisis económica y financiera argentina, agravada por la pandemia y la caída de los precios del petróleo, reforzó una vez más que el principal mecanismo de legitimación del CEI no es otro que el crecimiento y la atracción de divisas e inversiones para equilibrar la balanza de pagos. De esta manera, conforme fueron descendiendo los precios del petróleo, las expectativas se trasladaron desde los potenciales beneficios de Vaca Muerta, a los tangibles retornos de una “Vaca Viva”, en alusión a la oportunidad de promover las exportaciones de alimentos procesados de mayor valor agregado. Así, a mediados de 2020, en el contexto de la resolución de la crisis de la deuda argentina con acreedores privados, Fernández reconoció públicamente que el colapso de los precios del petróleo hizo que Argentina ya no pudiera confiar en sus reservas en el campo del *shale* patagónico para impulsar el crecimiento futuro. Como contrapartida y haciendo un juego de palabras, enfatizó que ameritaba pensar en la “Vaca Viva”, en alusión a las posibilidades derivadas de la vasta extensión de tierra fértil argentina⁶.

Por otra parte, pese a la histórica rivalidad del “campo” con el kirchnerismo –la principal fuerza política que conduce a Fernández al poder–, el mismo empresariado dejó traslucir su simpatía con esta perspectiva de crecimiento. Así, en una suerte de respuesta favorable a Fernández, el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel argumentó que:

“En los próximos años es probable que no lleguen inversiones o que lleguen pocas y sean insuficientes, por la condición global y la posición particular de Argentina. Tenemos que

5

“Palabras del presidente Alberto Fernández en su acto de asunción ante la Asamblea Legislativa”, martes 10 de diciembre de 2019. <https://www.caserosada.gob.ar/informacion/discursos/46596-palabras-del-presidente-alberto-fernandez-en-su-acto-de-asuncion-ante-la-asamblea-legislativa>

6

Mander, Benedict, 2020. Argentine president tells creditors: ‘we can’t do any more’. *FT Financial Times*, 19 July [online]. <https://www.ft.com/content/ea410bee-8985-411d-9ac2-07a95e6c69b5>

generar sistemas que permitan atraer esas inversiones hacia los sectores más competitivos que son los que mayor atracción pueden tener. El sector de alimentos, o el sector este de Vaca Viva que incluye alimentos, energía y otros productos vinculados con los vegetales, es uno de los que va a tener mayor demanda a nivel mundial. La mayor restricción del futuro será la falta de financiamiento. Es algo que debe resolverse de alguna manera. Si estudiamos la alternativa de armar zonas económicas parecidas a las que armó Deng para atraer la inversión con algún tipo de legislación internacional o incentivos, podríamos lograr que muchísima cantidad más de inversiones vengan a la Argentina”.⁷

Las lecturas más críticas del llamado ciclo progresista acuerdan en señalar que el otro mecanismo para legitimar el neoextractivismo durante ese período en Sudamérica fue el consumismo. En este punto se ha considerado incluso la existencia de un “pacto de consumo” (Boos, 2017) entre el gobierno y los sectores medios. Las clases medias urbanas sostuvieron durante cierto tiempo a gobiernos progresistas que introdujeron políticas redistributivas con diferentes volúmenes de populismo, principalmente debido al mejoramiento de su situación relativa medida en términos de una mayor capacidad de consumo. Gracias a los altos precios de las *commodities* en el mercado internacional y a la implementación de políticas redistributivas en varios países de la región, la pobreza se redujo significativamente y fueron surgiendo nuevos sectores medios en países como Bolivia, Perú o Brasil que adoptaron nuevos patrones de consumo. Del mismo modo, las clases medias establecidas aprovecharon esos beneficios ampliando sus consumos e incluyendo varios elementos suntuarios impensables en otras épocas (como frecuentes viajes al exterior o un segundo auto por hogar). Paulatinamente, esto fue generando un cambio de demandas al Estado y a la clase política más ligado a la conservación de esos nuevos privilegios y a nuevas formas de distinción frente a las nuevas clases medias que con la expansión de derechos y acceso a

7

Fontevicchia, Jorge, 2020. Gustavo Grobocopatel: Se necesita un “Vaca Viva” inversiones fuertes en el sector agroindustrial y en la bioeconomía. *Perfil*, 15 de agosto [online].
<https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/gustavo-grobocopatel-se-necesita-unvaca-viva-inversiones-fuer-tes-en-el-sector-agroindustrial-y-en-la-bioeconomia.phtml>

bienes públicos.⁸ Esto puede verse en los países mencionados y está en la base del regreso de la derecha más recalcitrante, y es diferente al caso chileno o colombiano donde las propias clases medias encabezan demandas progresivas. En cambio, en los actuales días de austeridad y de retracción del consumo en general, agravado por los efectos de la pandemia por Covid-19, el principal mecanismo de legitimación propio del CEI no es otro que el crecimiento *per se* y la atracción de inversiones extranjeras para equilibrar la balanza de pagos.

3. Gobernanza del capitalismo extractivo-informacional

El CEI tiene su propio modo de gobernanza que, junto a otros colegas, denominamos “gobernanza sustitutiva” (Pelfini, et al., 2020). El Estado abandona sus funciones y deja a las corporaciones el rol de agentes de “desarrollo” en los territorios y de socios directos de las comunidades locales. El Estado solo conserva su capacidad represiva en regiones donde el monopolio de la fuerza todavía está en disputa, como algunas regiones periféricas en Colombia o Perú, donde también corporaciones con grupos paramilitares ejecutan la violencia. En la gobernanza sustitutiva, el esquema conduce a relaciones bilaterales en lugar de trilaterales, lo cual socava directamente un elemento central e intrínseco de la noción de gobernanza: la relación de colaboración relativamente simétrica entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Esa sustitución entre agentes puede asumir diferentes formas más allá del clásico *by-pass*, como por ejemplo cuando uno de estos tres actores o agentes ocupa el espacio vacante dejado por otro producto de una acción ineficaz o por falta de capacidades y recursos. En este sentido, la sustitución tiende a ser una “segunda mejor opción”: una versión artificial y fallida en el desempeño de funciones y tareas que están siendo reemplazadas, según el concepto de *Ersatz* (sustitución, reemplazo) de Adorno.

3.1. Mercado + Sociedad Civil reemplazando al Estado en contextos neoliberales

8

Siguiendo a Castells y Calderón (2015), se observa que, bien el informacionalismo no transformó todo el sistema productivo, sí transformó la producción de soja, productos cárnicos, energía y gas, y metales raros (por ejemplo, litio en Bolivia), aumentando la calidad y la productividad en un círculo virtuoso de crecimiento económico. Sin embargo, este éxito del neodesarrollismo se basó fundamentalmente en dos premisas, que posteriormente revelarían su fragilidad: en primer lugar, que la demanda global de *commodities* seguiría aumentando y sus precios se mantendrían altos; y, en segundo lugar, que el Estado, basando su legitimidad en políticas redistributivas, podría permanecer al margen de una sociedad cada vez más informada, activa, con una clase media asertiva y creciente.

En estos casos, las corporaciones asumen las funciones de promotores del “desarrollo” y de mediación o prevención de conflictos con las comunidades locales. Esta es la relación sustitutiva más común en diferentes partes del mundo introducida por grandes inversores y proyectos de gran alcance. Por ejemplo, en Chile es cada vez más frecuente observar corporaciones dispuestas a ir más allá de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Estos actores privados buscan ser los verdaderos agentes de desarrollo al estar equipados con más información, recursos y arraigo territorial que el propio Estado (Pelfini y Mena, 2017).

3.2. Tendencias hacia la captura corporativa en relación al Estado

Este tipo de “gobernanza sustitutiva”, donde las empresas establecen un vínculo directo con la sociedad civil y asumen parte de las funciones estatales, se encuentra estrechamente vinculado al fenómeno de la “captura corporativa” del Estado⁹. No obstante, en el marco del CEI, vemos que este le agrega mayor “sutileza” (aunque no menor perversidad) a las formas clásicas de cooptación del Estado por parte de corporaciones y a la búsqueda de ventajas extraordinarias vía un dumping social y ambiental. No significa que estas prácticas hayan desaparecido, en tanto están vinculadas al extractivismo tradicional y a los modos neocoloniales de inserción de nuestra región en el mundo. Sin embargo, lo específico de la captura corporativa dentro del modo extractivo-informacional responde a mecanismos más sofisticados y se vincula subrepticamente con esa dinámica contradictoria entre fragmentación y conectividad: la creciente desterritorialización de cualquier regulación y exigencia normativa licuando la soberanía estatal hacia una autorregulación corporativa. Esto se plasma, por ejemplo, en la llamada *Lex Mercatoria*, a saber, un nuevo orden económico y jurídico global que comprende un amplio conjunto de normas en derecho internacional, junto con una extensa red de legislación nacional, dirigida principalmente a promover el comercio y proteger los intereses de los inversionistas extranjeros (Guamán, 2020). Sirve también como paraguas protector frente a legislaciones nacionales y también para cambiar normativas nacionales exigentes en la carrera “a la baja” de los países por atraer

⁹

Siguiendo a Durand (2019), este concepto considera que, dadas las marcadas asimetrías de poder entre las corporaciones y el Estado y la sociedad civil, se generan con mayor frecuencia y profundidad formas de influencia excesiva (legal) e indebida (ilegal) sobre las políticas públicas que favorecen a intereses privados. La captura de las políticas públicas por parte de las élites no es un fenómeno reciente ni exclusivo de los países en desarrollo. Sin embargo, en los últimos años la discusión en torno a la “captura corporativa” del Estado se vio fuertemente asociada al neoliberalismo (privatización, financiarización y desregulación) y a la concentración de intereses promovidos por la globalización económica.

IED. Asimismo, los conflictos que puedan derivarse por el no cumplimiento de legislaciones nacionales suelen zanjarse en tribunales internacional *ad hoc* subsumidos en el mismo espíritu de la *Lex Mercatoria*.

3.3. La “transparencia” como intento de legitimación política

El ideal de consolidar un Estado moderno según los principios del liberalismo político que no interfiera en la dinámica de un mercado crecientemente autónomo y en expansión redujo la cuestión de la legitimidad de la autoridad a un asunto de formalización, universalidad y transparencia de los procedimientos de tomas de decisiones, de “buena gobernanza” y de implementación y evaluación de políticas públicas en forma eficiente y transparente. Sin embargo, dentro de un esquema de poder asimétrico, proclive a la captura corporativa, con un tipo de gobernanza que privilegia el vínculo directo entre empresas y sociedad civil sustituyendo el rol del Estado como intérprete y promotor del interés general, los principales déficits y desafíos democráticos tienen que ver precisamente con la rendición de cuentas (*accountability*) y con la participación no solo consultiva sino vinculante en la toma de decisiones. No obstante, vemos que las principales preocupaciones a nivel de diseño institucional y calidad democrática dentro de este esquema de gobernanza sustitutiva en el CEI se concentran de manera sesgada en un atributo sin duda valioso, pero que se ha convertido en la virtud democrática *par excellence*: la transparencia, muy por encima de la promoción de la participación, la garantía del derecho a la información o a la organización política (Rodríguez Zepeda, 2009).

La transparencia –siempre parcialmente habilitada– se opone así al secretismo y a la opacidad de los arreglos informales o espurios, pero suele ser una demanda débil que cree satisfacerse con la mera publicación de balances, informes y el diseño de un sitio web amigable. En lugar del mucho más exigente derecho a la información, que supone un rol activo del Estado y de los expertos en reducir brechas de lenguaje y conocimiento, la transparencia se vincula con una democracia de baja intensidad o procedimental (Birchall, 2012). La importancia recae entonces en la existencia de reglas y mecanismos formales, codificados y susceptibles de ser evaluados en el proceso de políticas públicas medibles en adopción de rankings, índices y *benchmarking*. Un síntoma de ello es el creciente interés de varios países latinoamericanos en formar parte de EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), una iniciativa que integra a países que cuentan con importantes recursos mineros y petrolíferos como Argentina, Colombia, México y Perú. Se trata de una plataforma

informativa que exige a las corporaciones y a los gobiernos declarar periódicamente los datos sobre impuestos, utilidades e inversiones en las industrias extractivas (aunque sin incluir información sobre aspectos y externalidades ambientales ni abrir espacio para la litigación o monitoreo de conflictos derivados de ello).

4. Resistencias

Desde ya que cada régimen de gobernanza y cada modelo de desarrollo contiene y genera sus propias resistencias. En este sentido, resulta interesante el hecho de que también los procesos de disputa y contestación van cambiando en el marco del CEI: el conocimiento circula rápidamente y en forma profesional y en algunos casos los activistas pueden debatir en igualdad de condiciones con los expertos contratados por los inversores o el Estado; las tecnologías de comunicación y las redes sociales se vuelven cruciales en la acción colectiva facilitando la movilización así como la conectividad transnacional permite generar nuevas solidaridades y desafía al Estado-nación en forma original. Del mismo modo, fragmentación y conectividad también se combinan en forma original y paradójica: protestas intensas, pero que no logran escalar o agregarse con otras mayores insertándose en nuevas cadenas equivalenciales. Esto puede observarse en comunidades Mapuche a ambos lados de los Andes en su resistencia contra el acaparamiento de tierras en la Patagonia Argentina y el avance de la explotación forestal para la exportación en Chile; en algunas pequeñas ciudades de la Pampa Húmeda que han logrado prohibir el uso de glifosato y al menos objetar el avance de las semillas transgénicas, o el caso de pequeñas comunidades muy bien conectadas internacionalmente defendiendo sus escasos recursos hídricos y sus modos de vida tradicional frente a la extracción industrial de litio en la Puna jujeña. En general, este activismo no implica solo una simple oposición de plano a las industrias extractivas, sino que discute sus límites y los riesgos asociados, así como utilizan el conocimiento experto para la definición – o, mejor dicho, para participar en los debates sobre la definición – de esos límites y riesgos.

5. El futuro del capitalismo extractivo-informacional

El CEI se encuentra acechado no tanto desde el neoextractivismo, sino por derecha, por una versión prehistórica del capitalismo que nos lleva casi a la experiencia colonial: lo que podemos llamar el “capitalismo depredador”. Al menos por lo que se puede observar recientemente en Brasil, pero con antecedentes en Ecuador y Bolivia, luego del golpe de Estado al gobierno de Evo Morales, este capitalismo depredador combina la hegemonía de los intereses agroexportadores y sus asociaciones, la estigmatización e incluso la persecución

de militantes y organizaciones ambientalistas y la profundización de la marginación de las poblaciones indígenas. En Brasil, por ejemplo, bajo la etiqueta “Biblia, Bala y Buey”, estos sectores construyeron una coalición parlamentaria conservadora entre grupos evangélicos, exmilitares, terratenientes y grandes corporaciones del sector agrario junto a organizaciones de la derecha radical en diferentes ámbitos (educación, medios de comunicación, juventud, cultura, etc.). El resultado fue un claro avance neocolonial como ejemplo de colonialismo interno (González Casanova, 1963), en el que a través de procesos como el de acaparamiento de tierras y otros mecanismos relacionados, como el llamado “grilagem”, la frontera del extractivismo se extendió rápidamente sobre paisajes que brindan servicios ecosistémicos cruciales para todo el planeta, como el Amazonas, el Cerrado y el Pantanal de Mato Grosso.

El capitalismo depredador es parte de las tendencias recientes hacia la desglobalización conservadora, que combinan proteccionismo, nativismo y defensa de la industria nacional, entre otros aspectos (Sanahuja 2018, 2019; Pelfini, 2017). Además, implica una conexión mucho más arraigada con el territorio, en contraste con la articulación más volátil de fragmentación y conectividad presente en el CEI. En cuanto a los actores que lideran sus respectivas transformaciones, en lugar de élites transnacionalizadas, este capitalismo depredador es conducido por rancios grupos patrimoniales que nunca perdieron por completo el control de sus territorios (por ejemplo, el caciquismo regional en Santa Cruz o El Beni en Bolivia, y en Mato Grosso o Matopiba en Brasil) en alianza con las fuerzas de seguridad y reforzados con los fondos especulativos de los centros financieros globales.

Referencias

Birchall, Claire, 2012. Introduction to ‘Secrecy and Transparency’: The Politics of Opacity and Openness. *Theory, Culture & Society*, 28 (7-8), 7-25.

Boltanski, Luc y Thevenot, Laurent, 2006. *On Justification: Economies of Worth*. Princeton University Press.

Boos, Tobias, 2017. Pact of Consumption – Kirchnerism and the Argentinian Middle Class. *Journal für Entwicklungspolitik*, 33 (4), 37-62.

Brand, Ulrich and Wissen, Markus, 2017. The imperial mode of living. En: Spash, Clive, ed. *Routledge Handbook of Ecological Economics*, 152-161.

Brunkhorst, Hauke, 2014. *Critical theory of legal revolutions*. New York: Bloomsbury.

Calderón, Fernando, 2015. Navegar contra el viento. O las perspectivas de América Latina en la era de la información. *Revista de Sociología*, (30). doi:10.5354/0719-529X.2015.46410

Castells, Manuel y Calderón, Fernando, 2015. Latin America: Economic Faultlines. *Berkeley Review of Latin American Studies*, Fall, 14-21. Disponible: <https://clas.berkeley.edu/research/latin-america-economic-faultlines> [Acceso 14 de abril de 2019]

De los Reyes, J. and Sandwell, K., eds., 2018. Flex Crops: a primer. Transnational Institute, Think Piece Series on Flex Crops & Commodities, N° 6. Disponible: <https://www.tni.org/en/topic/flex-crops> [Acceso 15 de septiembre de 2020]

Dogan, Mattei, 2009. Political legitimacy: new criteria and anachronistic theories. *International Social Science Journal*, 60 (196), 195-210.

Durand, Francisco, 2019. La Captura Corporativa del Estado en América Latina. *trAndeS Working Paper Series*, 8. Lateinamerika-Institut (LAI), Freie Universität Berlin.

González Casanova, Pablo, 1963. Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo. *América Latina*, VI, 3, Río de Janeiro: Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales, pp. 15-32.

GRAIN, 2020. Digital fences: the financial enclosure of farmlands in South America [online]. Disponible: <https://grain.org/e/6529> [Acceso 17 de noviembre de 2020]

Guamán Hernández, Adoración, 2020. Fin del Estado de derecho y la protesta popular. En: Ramírez Gallegos, Franklin, ed. *Octubre y el derecho a la resistencia: revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador*. Buenos Aires: CLACSO, 149-165. Disponible: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200519040510/Ecuador.pdf> [Acceso 5 de octubre de 2020]

Lessenich, Stephan, 2016. The Externalization Society. Living beyond the Means of Others. En: Markus S. Schulz, ed. *The Futures We Want. Global Sociology and the Struggles for a Better World*. Madrid: International Sociological Association.

Lipset, Seymour, 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *The American Political Science Review*, 53 (1), 69-105.

Luhmann, Niklas, 1969. *Legitimation durch Verfahren*, Neuwied am Rhein: Luchterhand.

Pelfini, Alejandro y Mena, Rodrigo, 2017. Oligarquización y extractivismo. Cerrojos a la democratización de la política ambiental en Chile. *Perfiles latinoamericanos* [online], 25 (49), 251-276. <https://doi.org/10.18504/pl2549-011-2017>

Pelfini, Alejandro, 2017. Trump y la ilusión de la desglobalización. En: García Delgado, Daniel and Gradín, Agustina, eds. *Neoliberalismo tardío. Teoría y praxis*. Buenos Aires: FLACSO-Argentina.

Pelfini, Alejandro; Fulquet, Gastón; Marchegiani, Pía y Christel, Lucas. 2020. Neo-extractivism, Developmental Models and Capital Formation: Substitutive Natural Resource Governance in South America. En: Sujatha V., ed. *Global Capital and Social Difference*. New Delhi: Routledge.

Rodríguez Zepeda, Jesús, 2009. El principio rawlsiano de diferencia: dilemas de interpretación. *EnraHonar. International Journal of Theoretical and Practical Reason*, 43. <https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.276>

Sanahuja, José Antonio, 2018. Crisis de globalización, crisis de hegemonía: un escenario de cambio estructural para América Latina y el Caribe. En: Serbín, Andrés, ed. *América Latina y el Caribe frente a un Nuevo Orden Mundial: Poder, globalización y respuestas regionales*. Barcelona: Icaria-CRIES, 37-68.

Sanahuja, José Antonio, 2019. Crisis de la globalización, el regionalismo y el orden liberal: el ascenso mundial del nacionalismo y la extrema derecha. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 28 (1), 59-94. <https://dx.doi.org/10.26851/rucp.28.1.3>

Svampa, Maristella, 2013. Resource Extractivism and Alternatives: Latin American Perspectives on Development. En: Lang M. and Mokrani, D., eds. *Beyond Development. Alternative Visions from Latin America*. Quito: Transnational Institute; Rosa Luxemburg Foundation, pp. 117-143.

Disponible: https://www.tni.org/files/download/beyonddevelopment_complete.pdf [Acceso 14 de septiembre de 2020]

Svampa, Maristella, 2015. Commodities Consensus: Neoextractivism and Enclosure of the Commons in Latin America. *The South Atlantic Quarterly*, 114 (1), Duke University Press, 65-82, <https://doi.org/10.1215/00382876-2831290>

Svampa, Maristella and Zlipak, Ariel, 2015. La Chine en Amérique latine: du Consensus des matières premières au Consensus de Beijing. *Problèmes d'Amérique latine*, 3 (3), 95-122, <https://doi.org/10.3917/pal.098.0095>